

Problemas y contradicciones fundamentales en la crisis chilena

Julio César Jobet

A pesar de su fisonomía política liberal, resultado de la vigencia de la Constitución de 1925 y de un innegable apego a las normas jurídicas en la vida cívica, Chile atraviesa por una gravísima crisis económica, social y espiritual. Sus formas de existencia relativamente adelantadas, sus conquistas jurídicas de diverso orden; su amplia legislación previsional y del trabajo; el apoliticismo de sus fuerzas armadas; sus prácticas ciudadanas de apego a la libre discusión y a los procedimientos democráticos; su poderosa minería del cobre; sus éxitos en la creación de algunas importantes ramas industriales (siderurgia, petróleo, textil y celulosa) y en la electrificación del país, llevan a muchos observadores a proclamar a Chile un país desigualmente desarrollado en vez de nación atrasada. Pero tal juicio no logra disimular las profundas contradicciones imperantes; subsistencia de profundos rezagos coloniales; predominio de privilegios desmesurados e irritantes; miseria y desamparo de sus mayorías laboriosas; primitivismo increíble en zonas, y en rubros, decisivas para el poderío y progreso del país; destrucción irracional y vandálica de sus recursos naturales por incapacidad e inercia; desperdicio de las fuerzas creadoras de enormes sectores de su población, de su juventud, de sus obreros y campesinos, de sus profesionales. La nación entera pareciera marchar a la deriva por carecer de rumbo y destino.

El catedrático y economista **Alberto Baltra**, en su excelente obra: "**Crecimiento económico de América Latina**", escribe con certeza: "El problema fundamental de la economía chilena no puede plantearse en términos estrictamente económicos. Este es un criterio estrecho y corto. Más que nada es, seguramente, un criterio interesado. El problema económico básico que afecta a Chile, se

relaciona indisolublemente con la estructura social, cultural e institucional del país. Es verdad que los cambios en la estructura, por lo común, envuelven penosos sacrificios para las personas cuyos intereses están ligados a las instituciones en vigencia, pero el sacrificio de las minorías privilegiadas es el precio histórico que siempre han debido pagar los pueblos para abrirse camino hacia el progreso que buscan y conceder a las grandes masas populares el bienestar que exigen. Es la destrucción creadora, de que habla Joseph Schumpeter. Las sociedades no pueden crecer dentro de las viejas estructuras. Desde este punto de vista, el desarrollo económico es un proceso genuinamente revolucionario. No puede haber avance sin que cambien fundamentalmente la posesión del mando político y la distribución del ingreso nacional. Los que, apegados a sus conveniencias y encañecidos por la pasión lucrativa, se aferran, al actual orden negándose a oír las exigencias del progreso sólo conseguirán, con su conducta insensata, añadir la violencia a la reforma. Es la lección de la Historia.

Es el dramático caso de Chile. Con su régimen democrático-burgués no ha podido resolver sus graves problemas y, por el contrario, las injusticias se ahondan; la miseria aumenta; el desarrollo se encuentra detenido; el descontento se vuelve general y un clamor violento en contra del sistema y de los privilegiados se extiende a los diversos sectores, crece, se torna amenazante...

I

Los problemas económico-sociales de Chile son los mismos de la América Latina y se derivan de su semifeudalismo agrario, de la monocultura de su economía, de la explota-

ción imperialista y de su industrialización inadecuada. Desde fines de la segunda guerra mundial sus consecuencias nocivas se han profundizado. Según los economistas, a partir de 1950 el ritmo del desenvolvimiento económico chileno empezó a declinar peligrosamente. El gobierno de Gabriel González Videla se demostró ineficaz y no pudo impedir el marasmo. Las multitudes desencantadas de la politiquería estéril personificaron en la figura de Carlos Ibáñez del Campo, ex-dictador militar, caudillo "independiente", sus ansias de justicia social y de seguridad económica, dándole una victoria espectacular en los comicios presidenciales de septiembre de 1952. Pero el gobierno del anciano y versátil "estadista independiente" siguió los mismos cauces del anterior y exhibió idéntica infecundidad. Frente al agravamiento de la crisis nacional, recurrió a los servicios de la misión de técnicos norteamericanos Klein-Sacks, en 1956, para intentar con ella una reorganización y una nueva orientación del proceso nacional. Nuevo y rotundo fracaso. La política Klein-Sacks impuesta al gobierno chileno por los Estados Unidos causó un mayor perjuicio al desenvolvimiento económico general del país. La CEPAL informó al respecto: "La situación económica en 1957 con relación al promedio anual 1953-55 sufrió las siguientes variaciones: el producto bruto por habitante bajó en 8,8%; el ingreso real por asalariado bajó en 19,8%; la inversión bruta bajó en un 24,2%; el índice de producción de vestuario bajó en un 9,4%; el índice de producción industrial bajó en un 4,1%; el índice de edificación bajó en un 55,2%. La proporción del sector asalariado en los gastos de consumo bajó en un 10,5%".

El fracaso del gobierno de Ibáñez repercutió en una nueva dispersión política y permitió el triunfo de la postulación de Jorge Alessandri Rodríguez, en las elecciones presidenciales de septiembre de 1958, apoyado por todas las fuerzas capitalistas. Venció por un estrechísimo margen al candidato del Frente de Acción Popular, senador Salvador Allende.

El gobierno de Alessandri se propuso como meta y remedio a los males de Chile, instaurar un régimen liberal, extendiendo la "libre empresa", y frenar ante todo la inflación. Tales medidas se imponían, al decir de los vencedores, por un verdadero estadista, independiente de los partidos políticos, conocedor de los problemas nacionales, empresario eficiente y laborioso, ciudadano austero. Su actividad y sus medidas serían el antídoto a los efectos dañinos del "socialismo de Estado",

implantado desde 1938 por las izquierdas demagógicas.

A partir de sus primeros actos el pretencioso gobierno de Alessandri evidenció una asombrosa y desconcertante improvisación, una absoluta carencia de plan y objetivos, sin energía y originalidad para enfrentar y resolver los tremendos problemas del país. Según los especialistas, la situación a fines de 1959, al cumplirse el primer año de su gobierno, "estaba alcanzando perfiles peligrosos como consecuencia de la política gubernamental que puso todo el acento en la contención de la inflación y atacando sólo su aspecto monetario. La violenta contracción de la demanda que ello ocasionó, fue seguida por cesantía, distribución regresiva del ingreso, desaprovechamiento creciente de la capacidad instalada, descenso de la tasa de inversiones y mala orientación de los escasos proyectos de inversión, mal uso de las divisas, efervescencia social, etc. Tal orden de cosas, en último término, se debía a la aplicación gubernamental del esquema irrelevante del Fondo Monetario Internacional, que encontró en la mentalidad de la Derecha Económica el ambiente propicio para imponer su modelo de desarrollo "al estilo tradicional", es decir, aquel que llevaba el aporte exterior a la calidad de única panacea para el crecimiento y para salir del círculo en que se debaten los países subdesarrollados".

II

Ante la posición intransigente del gobierno de Alessandri de defensa de la "libre empresa" y de los empréstitos del extranjero, cabe preguntarse ¿es que el régimen liberal ortodoxo dio resultados fecundos en el desenvolvimiento del país, como para pensar en su restablecimiento, a manera de nuevo y eficaz remedio? No. Y, precisamente, los problemas económicos y sociales actuales son la secuela de ese sistema clasista, derrochador y estéril. En 1959 apareció una obra magistral sobre la evolución económica del país: "**Chile, un caso de desarrollo frustrado**" del economista y sociólogo **Anibal Pinto Santa Cruz**, como una oportuna respuesta a las recetas liberales del gobierno. Realizada con gran seriedad científica y basada en una vastísima documentación, su autor señala dos conclusiones primordiales en su amplio examen: La verificación de que el desenvolvimiento chileno se llevó a cabo durante cerca de un siglo en las condiciones más favorables para que se hubieran cumplido las expectativas del credo

clásico y liberal. El comercio exterior fue un resorté inestable, pero dinámico; no hubo interferencias oficiales de importancia en el mecanismo de las "fuerzas naturales" del mercado; la "paz y el orden" primaron casi invariablemente; el ingreso se distribuyó con la suficiente desigualdad como para crear amplias posibilidades de ahorro en los pudientes; hubo una corriente importante y sostenida de capitales y créditos extranjeros, y sin embargo en el desarrollo económico no se lograron ni un aumento general de la productividad del sistema ni una diversificación apropiada de sus fuentes productivas. Es este un hecho principal, "sobre todo cuando en la actualidad, olvidando lo ocurrido, se presentan como panacea infalible una serie de circunstancias y requisitos que fueron precisamente los que primaron en el siglo de precrisis". 2.— La "gran contradicción del desenvolvimiento chileno, que se viene planteando desde antiguo entre el ritmo deficiente de expansión de su economía y el desarrollo del sistema y la sociedad democráticas. La contradicción apuntada se agrava y quizás se aproxime a un punto de ruptura. El desequilibrio tendrá que romperse o con una ampliación substancial de la capacidad productiva y un progreso en la distribución del producto social o por un ataque frontal franco contra las condiciones de vida democrática, que, en esencia, son incompatibles con una economía estagnada".

Las afirmaciones de Anibal Pinto con respecto a la evolución del país bajo el imperio del liberalismo ortodoxo adquirieron plena validez al enfocar la experiencia del gobierno de Alessandri. Su régimen de libre empresa se tradujo en una red de privilegios en favor de los clanes financiero-industriales ligados estrechamente a los consorcios extranjeros. A los cuatro años de gestión el desastre económico-social experimentado con su sistema libre-empresista administrado por gerentes y técnicos liberales, es de tal magnitud que Chile se encuentra al borde del colapso, apenas suspendido en medio del abismo de la peor crisis de su historia, por la frágil cuerda de los empréstitos extranjeros y de las promesas de la Alianza para el Progreso.

Chile, en este año de 1962, según lo establecido por el propio Presidente de la República, en su último Mensaje, posee un déficit por cubrir del Presupuesto, de 338 millones de escudos, (el escudo a la par con el dólar), cuando el ingreso total es de 860 millones de escudos. Es el déficit más grande en la historia del país y lo más grave: tiende a empeorar; cada

año el déficit aumenta con respecto al anterior.

El senador Eduardo Frei, líder de la democracia cristiana, en un vigoroso discurso analizando el Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 1962, en relación con el endeudamiento del país por la actual administración, dio datos aterradores. El año 1952, al iniciarse el gobierno de Ibáñez, la deuda pública ascendía a 310.000.000 de dólares. A su término, en 1958, llegaba a 392.400.000 dólares. Hubo un aumento de 82.400.000 dólares. Al 31 de diciembre de 1961, en tres años de régimen alessandrista, llegó a 787.700.000, es decir, creció en 395.300.000 dólares. Con los créditos ya contratados, llegará al 31 de diciembre de 1962, a una suma no inferior a 1.000 millones de dólares. Al término de su administración tendremos una deuda de 1.500 millones de dólares, o sea, en seis años la deuda exterior habrá aumentado en más de mil millones de dólares. Y en todo esto el terremoto influye sólo en poco más de 100 millones de dólares. Y no se ha incluido en las deudas señaladas 120.000.000 de dólares en deudas particulares con garantía del Estado. A tan lamentable panorama se agrega, el endeudamiento privado, hecho nuevo en la historia del país. Una política errónea empujó al sector privado a endeudarse con dólares. Esos compromisos se estiman en una suma aproximada a los 250.000.000 de dólares.

No obstante esta tremenda deuda el gobierno sigue esperanzado en nuevos empréstitos y en la ayuda externa a través de la Alianza para el Progreso.

III

Por otro lado, el gobierno hizo pomposas declaraciones en orden a mantener la estabilidad de la moneda, defendiendo el cambio de \$ 1.053 por dólar. La desacertada gestión económica de sus cuatro años de gobierno culminó con una nueva devaluación. El dólar se cotiza, en el mercado libre a \$ 2.000. Por la razón anterior el costo de la vida experimentó una violenta alza, cuyo nivel es todavía prematuro fijar. Pero el propio gobierno, obstinadamente reacio a reconocer el fenómeno inflacionario durante su mandato, se adelantó a presentar un proyecto de reajuste de rentas por un 15%, con la confesión de sus partidos de ser insuficiente para compensar el encarecimiento real. Lo tangible en este asunto: un nuevo y más grave deterioro en las ya precarias condiciones de vida de las masas asalariadas chilenas.

El gobierno clama desesperadamente por la ayuda prometida a través de la Alianza para el Progreso, y el intercambio de misiones y de personeros chilenos y norteamericanos con el objeto de hacerla realidad es, sencillamente torrencial. Pero no se concreta, porque el gobierno de Kennedy exige, previamente, Reforma Agraria y un Plan General de Desarrollo. Sus expertos desean conseguir la inversión efectiva de sus préstamos en obras reproductivas y no en cubrir los gastos ordinarios del Estado.

El gobierno de Alessandri en ningún momento ha intentado imponer medidas drásticas sobre los capitalistas nacionales y extranjeros, enderezadas a obtener recursos propios. Según el economista Alberto Baltra, el ahorro total chileno, en los últimos años, ha sido del 10% del ingreso nacional; el ahorro de patrones y empresarios se estima en un 6% de ese ingreso. Si el ahorro de éstos se doblara, el coeficiente del ahorro total se elevaría a un 16% del ingreso, o sea, aumentaría en un 60% con respecto a la tasa actual: "Bastaría que las clases con altos ingresos incurrieran en moderados sacrificios de sus consumos excesivos para que la economía chilena mejorara sustancialmente la inversión y, por tanto, apresurase el ritmo de su crecimiento sin sacrificar los consumos ya exiguos, de las clases con ingresos bajos y medianos.

La opinión de Baltra es también la del economista inglés **Nicholas Kaldor**, profesor de Cambridge, quien en 1956, a solicitud de la CEPAL, visitó Chile. Entregó un profundo análisis de su situación en el trabajo: "Problemas económicos de Chile". Para Kaldor, el consumo suntuario de la clase propietaria chilena "absorbe una parte totalmente desproporcionada de los recursos nacionales". De acuerdo con la forma en que la clase propietaria distribuye su ingreso bruto, utilidades, intereses y rentas —entre las diversas categorías de gastos, resulta que consume el 64%; ahorra el 21% y paga en impuestos, el 14,7%. La misma clase en Inglaterra, consume el 30,5%; ahorra el 27,4%, y paga en impuestos, el 42%. Si, en Chile, la clase patronal empresaria dedicase al consumo un porcentaje idéntico al de la británica, el coeficiente chileno de inversión aumentaría en más del doble. Concluye Kaldor: "Las estimaciones anteriores vienen a contradecir, por lo tanto, el socorrido argumento de que es imposible financiar una tasa más acelerada de capitalización real en Chile sin contar con una gran ayuda económica del extranjero. De acuerdo

con las estimaciones del ingreso nacional, sería posible doblar la tasa de inversión bruta en por ciento del producto nacional sin rebajar el nivel de vida de las masas".

Con el egoísmo despiadado y la falta de patriotismo de las clases pudientes es imposible obtener recursos extraordinarios con el alto propósito de abrir las compuertas del desarrollo del país. El gobierno, por expresar sus intereses, no se allana a cercenar sus privilegios y despallaros; tiende, entonces, su mano implorante, al gobierno norteamericano y, al mismo tiempo, le promete a cambio de sus préstamos, una reforma agraria mistificadora, concebida como un nuevo y colosal negocio para los grandes propietarios de tierras, quienes se desprenderán de porciones de sus latifundios a cambio de suculentas indemnizaciones o venderán en forma abusiva sus predios; y presentándole un plan decenal de desarrollo económico que en nada herirá o modificará los intereses privados y anti-sociales.

Frente a la experiencia chilena el siguiente trozo del economista **Paul A. Baran** es de una irrefutable justeza: "El hecho crucial que determina que la realización de un programa de desarrollo sea ilusoria es la estructura política y social de los gobiernos que están en el poder. No se puede esperar que la alianza de clases propietarias que controla los destinos de la mayoría de los países subdesarrollados proyecte y ejecute una serie de medidas que vayan en contra de sus propios intereses inmediatos. Si con el propósito de apaciguar a un público inquieto se enuncian oficialmente planes de medidas progresistas, tales como la reforma agraria o una equitativa legislación tributaria, etc., su ejecución será intencionalmente sabotada. El gobierno, que representa un compromiso entre los intereses de los dueños de la tierra y los de los comerciantes, no puede suprimir la ineficiente administración de las propiedades raíces, y el consumo conspicuo por parte de la aristocracia no puede suprimir los abusos monopolistas, las especulaciones, las fugas de capitales y la vida extravagante de los hombres de negocios. No puede reducir o suprimir sus pródigas concesiones a las instituciones militares y policiales, más aún cuando estas instituciones constituyen su principal protección en contra de posibles levantamientos populares. Establecido para resguardar los derechos de propiedad y los privilegios existentes, el Gobierno no puede transformarse en el arquitecto de una política encaminada a des-

truir los privilegios que obstaculizan el progreso económico y a colocar la propiedad y las rentas de ellas derivadas, al servicio de la sociedad”.

IV

Aunque Chile ha experimentado una “explosión demográfica”, en razón de su alta ta-

sa de crecimiento, superior al 2,5%, todavía su población es reducida frente a su gran extensión geográfica. Son 7.500.000 habitantes en 742.000 kilómetros cuadrados, con una densidad de 10 habitantes por Km².

Junto con el crecimiento demográfico se ha acentuado el proceso de urbanización, según queda de manifiesto en la siguiente estadística:

1920.—	46,4	población urbana;	53,6	población rural
1930.—	49,4	población urbana;	50,6	población rural
1940.—	52,5	población urbana;	47,5	población rural
1952.—	60,2	población urbana;	39,8	población rural

Entre 1940 y 1952 la población rural creció apenas un 3%, en cambio la urbana alcanzó un 42%. Y el aumento global de la población del país, en el período de 1940-1952 correspondió a una variación de 23,2%. La proporción de la población que vive en ciudades de más de 20.000 habitantes aumentó de 28%, en 1940, a 40%, en 1950. Entre 1952 y 1960 aumentó en 1.408.000 personas, un 23,2%, alcanzando a 7.341.000 habitantes. La población activa suma 2.800.000, de la cual un 39% se dedica a la agricultura y pesca y un 15% a la industria. La renta media per capita se estima en 325 dólares.

En general, la población es escasa y se encuentra estratificada en clases sociales marcadamente separadas, donde alternan formas de sociedad colonial, pre-capitalistas, con formas propias de la estructura capitalista. En cuanto a su infra estructura, Chile presenta un acusado subdesarrollo económico, social, educacional y técnico. Dentro de este cuadro negativo se podría destacar como rasgo favorable el hecho de encontrarse en el momento de tránsito de una economía de tipo agrario, bajo el predominio del latifundio, a una economía de tipo industrial.

El avance industrial de Chile ha sido muy lento. En 1895 existían 2.248 establecimientos industriales con 42.747 operarios; en 1911, se clasificaron 5.270 establecimientos industriales, con un capital de 420.300.000 pesos de la época. La composición de la fuerza de trabajo era: hombres, 49.000, (69%); mujeres, 16.500 (23,2%); y niños, 5.500, (7,8%). Un total de 71.000 trabajadores. En 1920, año de gran efervescencia social, se registraron 8.000 establecimientos industriales, con 80.549 obreros. En 25 años aunque se cuadruplicó el número de establecimientos, apenas se dobló el

número de trabajadores, porque el carácter de aquéllos era predominantemente artesanal. Solo a partir de 1939, con el triunfo del Frente Popular y la creación de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), se inició una política de independencia económica, contemplándose un incremento industrial amplio: electrificación, siderurgia, petróleo, celulosa; y el mejoramiento técnico de las diversas actividades productivas. La iniciativa privada de un sector de la burguesía nacional promovió la industria metalúrgica y textil, principalmente. En 1952, la fuerza de trabajo empleada en la industria fabril llegó a 204.000 personas. En el decenio de 1940-50 se anotan importantes adelantos en el campo industrial. Y en el período 1940-45 la industria generaba el 15,4% del producto bruto; y en 1956, el 19,6%. Pero el proceso de crecimiento se detiene a partir de 1953.

No obstante su progreso es todavía una industria incipiente, carente de instalaciones adecuadas y con escasez de obreros especializados. Por otra parte utiliza un alto porcentaje de materia prima importada, lo cual la hace dependiente por ese hecho y respecto al equipo mecánico, traído en su totalidad de los grandes países capitalistas. Dispone de un mercado interno reducido en vista de los ínfimos salarios y sueldos de los obreros y campesinos. En 1957, por ejemplo, los establecimientos manufactureros sólo utilizaron el 48% de la capacidad teórica instalada.

Desde el bienio de 1936-38 hasta 1958, la producción industrial se incrementó en 226%; la producción agropecuaria en un 32% y la producción minera en un 21%. En los últimos años la producción de bienes creció en 157% y dentro de ella, a la agricultura correspondió un 84% de incremento; a la industria un

354% y a la minería un 9%. Estas cifras subrayan el profundo desnivel entre una industria en relativo ascenso y una agricultura atrasada, de escasa productividad, y frente a una minería estagnada por su condición de industria extractiva de materias primas en manos de grandes consorcios internacionales.

De todos modos la rentabilidad de la industria chilena ha sido elevadísima por el alto nivel general de precios, aprovechando su posición privilegiada por la protección del Estado y por su monopolización. Según el excelente libro de Ricardo Lagos E.: "La concentración del poder económico", publicado en 1961, las "sociedades anónimas nacionales, incluidas compañías de seguros y bancos, casi llegan a 1.300, y tienen un capital total de 720.943.429 escudos. De las 1.300 sociedades anónimas, cincuenta y nueve tienen en conjunto un capital de 437.237.121 escudos. En otras palabras, el 4,2% de las sociedades anónimas nacionales controla el 59,2% del total de los capitales por ellas invertidos, en tanto que el 95,8% restante posee sólo el 40,8% del capital total".

Los bancos se han convertido en los detentadores del capital financiero indispensable a toda industria y con él ejercen una influencia poderosa. Ricardo Lagos demuestra en su estudio que "de los once grupos que constituyen el núcleo de la economía chilena sólo tres no están organizados alrededor de un banco". Por ejemplo el Grupo Banco Sud-Americano está constituido por 126 sociedades anónimas, el 9,7% del total. Lo integran tres sub-grupos: Alessandri-Matte; Salfa (Salinas y Fabres); y Cooperativa Vitalicia, y algunos "independientes". El grupo mencionado controla o influye en sociedades cuyos capitales ascienden a 288.351.848 escudos, el 40% del total de los capitales invertidos en sociedades anónimas. En seguida, por la magnitud financiera alcanza una importancia decisiva, el grupo Banco de Chile. Es, además, elemento de unión entre los grupos económicos Edwards, Sud-Americano y Punta Arenas.

Ricardo Lagos detalla las diversas empresas industriales, minas y fábricas, que controla o influye cada grupo económico y demuestra en forma objetiva e inapelable, la tremenda monopolización del poder económico en Chile. Se traduce en la imposición de altos precios, y de su aumento constante a pesar de las disposiciones legales fijándolos; en una profunda desigualdad en la distribución de la renta nacional; con el control casi total de los medios de expresión (prensa y radio) en la influencia determinante en la política, (gran

número de parlamentarios son miembros de los directorios de las sociedades anónimas; asimismo ministros y jefes de servicios, y las directivas de algunos partidos se confunden con las de las grandes empresas económicas; y también actúan y dominan en los organismos estatales, (Empresa Nacional de Petróleo, Empresa Nacional de Electricidad, Compañía de Acero del Pacífico, Industria Azucarera Nacional).

Al lado de la concentración del poder económico nacional se destaca la trascendencia de la sociedad anónima extranjera, a la cual se subordina aquél. En 1957, los activos de las sociedades anónimas nacionales alcanzaron 826.434.406 escudos, sin considerar bancos ni compañías de seguros, y los activos de las agencias extranjeras llegaron a 430.781.251 escudos, o sea, a más de la mitad del capital de las sociedades nacionales. Las entidades extranjeras sólo son 60, y las nacionales son 1.300. Estas cifras suministran una idea de la gran dependencia de Chile del capital extranjero.

V

La dependencia de Chile del capital extranjero es completa y por eso presenta los rasgos de una factoría de los consorcios imperialistas. Todas sus materias primas esenciales se encuentran en poder de los monopolios internacionales. Y, en último término, su andamiaje financiero depende de la industria cuprera, acaparada por empresas norteamericanas. Se aplica a la trágica realidad chilena esta página del economista Alberto Baltra, de su obra "Crecimiento económico de América Latina": "En numerosos países latinoamericanos hay empresas extranjeras —productoras y exportadoras de bienes primarios que aún disfrutan de regímenes de privilegios, que las tornan carentes de influencia positiva en el proceso de desarrollo. Estas empresas retienen en el exterior una cuota apreciable de los valores exportados. Dicha cuota excede —en mucho— a lo que puede estimarse una remuneración equitativa de los capitales foráneos invertidos en las correspondientes actividades primarias. Como ya se dijo, el valor no retornado resta impulso dinámico a la economía del país de origen de la exportación. Se da así el hecho paradójico de que los pueblos de América Latina no puedan crecer más rápidamente debido a la escasez de sus ahorros y de la inversión, pero que, no obstante, algunos de estos países sean exportadores de capital. En Chile, por ejem-

plo, entre los años 1944 y 1956 la gran minería del cobre dejó fuera del país 600 millones de dólares en circunstancias que la inversión privada total de Estados Unidos en la minería chilena asciende a 600 millones de dólares. Es difícil sostener que estos sectores privilegiados extranjeros constituyan parte integrante de las respectivas economías latinoamericanas".

Desde la iniciación de las faenas de la industria cuprera hasta 1928 no retornaron al país unos 300 millones de dólares. Entre los años 1928-1950, según el **diputado liberal Mariano Puga**, no retornaron al país 1.013,8 millones de dólares, más 217 millones de dólares de gastos en el exterior (fletes, seguros, comisiones, intereses, impuestos de internación en los Estados Unidos). En el decenio de 1950-59, según el **economista Mario Vera**, los valores no retornados alcanzaron a 770 millones de dólares. En 1960, el no retorno llegó a 145 millones de dólares, o sea, 2.445 millones de dólares. Y es preciso agregar la pérdida, para Chile, por la congelación del precio de venta del cobre a 11,5 centavos de dólar la libra, durante la guerra mundial, impuesta como contribución a la lucha contra el fascismo. Los consorcios entregaron el cobre al gobierno norteamericano al precio de guerra, burlando al gobierno chileno en 500 millones de dólares. En resumen, desde el establecimiento de los consorcios extranjeros del cobre hasta 1960 han retirado del país, o se han dejado de percibir, 2.945 millones de dólares.

La expropiación anterior se ha intensificado con los privilegios otorgados a los inversionistas norteamericanos por la ley 11.828, llamada del "nuevo trato". El **economista Mario Vera Valenzuela** en su notable monografía "**La política económica del cobre en Chile**", aparecida en 1961, lleva a cabo un amplio examen de la gran minería del cobre y de la expropiación de las inversiones extranjeras dueñas de él. Abarca la totalidad de los elementos que juegan con el desenvolvimiento de la gran minería del cobre y suministra un balance completo de los resultados de la ley N° 11.828.

El autor demuestra que "la inversión extranjera, al establecerse en un país subdesarrollado, no es hecha como respuesta a la necesidad de crecimiento de dicho país, sino que se realiza respondiendo, a una necesidad del país de origen de la inversión. En este sentido, el capital foráneo va a radicarse en el sector exportador y más concretamente en aquellas actividades que proporcionarán a bajos precios las materias primas que necesita la

metrópoli". Por esta razón, las refinerías y sus industrias manufactureras se construyen en los países de donde vienen los capitales. El cobre y el hierro chilenos son llevados en forma mineral, sin ninguna elaboración previa en el país.

La explotación del cobre adquiere importancia en Chile desde 1834, cuando el francés Lambert introdujo el horno de reverbero, que permitió la fundición de los minerales sulfurados. En 1850 la producción fue de 15.000 toneladas; en 1872, de 52.400 toneladas; y en 1876 alcanzó su máxima producción, el 62% del cobre extraído en el mundo. Y lograda, exclusivamente, con el trabajo y los capitales de los chilenos. En seguida decayó y se le reemplazó por el salitre. A comienzos del siglo actual la empresa "Braden Copper Company" adquirió el mineral "El Teniente", en la provincia de O'Higgins, operando como agencia extranjera desde 1905. En 1916 pasó a ser subsidiaria de la Kennecott Copper Corporation. En 1913 se instaló la "Chile Exploration Company", en Antofagasta, para explotar el mineral de Chuquicamata; y en 1920, se instaló la "Andes Copper Mining Company", en Atacama, para explotar Potrerillos. Ambas como subsidiarias de la Anaconda Copper Mining Company. Mientras en 1913 las empresas mencionadas cubrían el 20% del total de la producción cuprera nacional, en la actualidad alcanzan al 80%.

La Braden inició sus faenas con un capital de 2,5 millones de dólares; y la Chillex, con capital inicial de 1 millón de dólares. Son los aportes iniciales del capital norteamericano en la industria del cobre. La Andes Copper inició sus actividades en 1920 con un capital de 50 millones de dólares. En el presente, la Braden, la Chillex y la Andes Copper poseen una capacidad de producción de 500.000 toneladas e inversiones por 540 millones de dólares. Un índice de las ventajosas condiciones del negocio del cobre lo revela este hecho, citado por Mario Vera: la Braden en el periodo de 1924-1951 retiró del país por utilidades, reservas, amortizaciones por construcciones y equipos, 324.308.081 de dólares; y dejó por conceptos de impuestos, 154.575.720 dólares.

Desde la vigencia de la Ley N° 11.828, de Nuevo Trato al Cobre, los ingresos tributarios del metal rojo pierden importancia dentro del total de impuestos recaudados por el Fisco: "en 1955, los ingresos tributarios del cobre alcanzan a 163 millones de dólares; en 1961, serían 68 millones. Atendiendo a los niveles de exportación de ambos años se tiene

que, para 1955, el Fisco percibe 423 dólares por tonelada y en 1961 tan sólo se percibirán 122 dólares por tonelada". Esta menor tributación del cobre es sustituida con un marcado ascenso de los tributos indirectos. Según CEPAL, en 1948, Chile produjo el 21% del cobre mundial, y en 1953, se redujo su participación al 14%.

La tasa de tributación en Chile es bajísima, porque la rentabilidad de las inversiones de estas compañías es elevadísima, excediendo al 20% sobre el capital invertido. La Ley del Nuevo Trato significó una regresión con respecto de la Ley N° 10.255 que regía antes a las empresas, con respecto a los retornos. Comenta el economista Vera: "debe anotarse que el menor retorno ocasionado con la aplicación de la ley actual para el quinquenio 1955-59 asciende a 141,2 millones de dólares. Agregando los menores retornos de los años 1960 y 1961 se llega a los 203 millones de dólares desde la vigencia de esta ley, y ello sin considerar las pérdidas ocurridas por la liberación de derechos aduaneros y los gastos en el exterior". Las compañías ahora producen más cobre blister y menos refinado, porque construyeron nuevas refinerías en los Estados Unidos. En 1950 se producen 45.000 toneladas métricas de tipo blister y en 1959, dicha producción alcanzó a 232.000 toneladas métricas. Se tradujo en un alza de los gastos de refinación en el exterior de 2 millones de dólares en 1950, a 10 millones de dólares en 1959.

El gobierno chileno no tiene ninguna intervención en el comercio de su cobre, y éste, únicamente, se vende en el "mercado occidental", en circunstancias que de acuerdo con los antecedentes traídos por la Misión Artega después de visitar algunos países del bloque soviético, en la URSS, Polonia, Checoslovaquia y Hungría podrían comprar unas 170 a 180.000 toneladas a buen precio.

El gobierno chileno percibe menores ingresos provenientes del cobre y los reemplaza con impuestos indirectos, o sea, la masa consumidora, las clases populares pagan lo que deja de tributar el imperialismo. En cambio, las compañías beneficiadas con la menor tributación (de 163 millones de dólares bajó a 70 millones) aumentan sus utilidades de 54 millones de dólares, en 1955, a 65 millones de dólares, en 1961. Adicionalmente, la recuperación de inversiones, hecha a título de depreciación se eleva de 10 millones de dólares en 1955 a 37 millones de dólares en 1961. Esta depreciación es una forma de beneficio sobre la cual no se tributa.

Mario Vera termina su extraordinario exa-

men de la industria del cobre con estas líneas: "Se ha estimado en 3.000 millones de dólares el valor de los no retornos de las empresas de la gran minería del cobre. Esta cuantía es una cifra sideral si se piensa que en 1960 el capital nacional en valor actual tiene un equivalente a US\$ 8.000 millones de dólares. Estos se formaron durante 400 años. Las empresas del cobre sólo en 40 años han retirado del país 3.000 millones de dólares. Ahora, si sabemos que estas empresas desde su iniciación han invertido bastante menos que 500 millones de dólares y cuyos aportes iniciales fueron de 3,5 millones, queda como afirmación categórica: el cobre es un buen negocio".

Según otros estudios técnicos sobre las inversiones reales de los consorcios norteamericanos, (Braden, Chillex y Andes Copper), hasta 1960 alcanzaban 444 millones de dólares y si a dicho valor se le deducían 235 millones de dólares amortizados, restaban 209 millones de dólares. Ese sería el valor actual de las instalaciones de la gran minería del cobre.

Esta larga exposición demuestra la expoliación terrible de la economía chilena por los consorcios del cobre.

Una expoliación idéntica se aprecia en la minería del hierro. Su producción aumentó en forma notable por la inversión de nuevos capitales norteamericanos y japoneses. Los planes contemplan una producción de 9 millones de toneladas, la cual será íntegramente exportada a los Estados Unidos y al Japón. En este rubro la situación es más grave por encontrarse en desarrollo una industria siderúrgica nacional y se compromete su destino si se exportan con tanta liberalidad sus existencias de hierro, en vez de reservarlas para el incremento de la industria pesada nacional.

La producción de salitre y de carbón ha disminuído considerablemente. Si se observa, por ejemplo, la producción de carbón en un lapso de diez años, se advierte un sostenido descenso. En 1952 alcanzó a 2.208.619 toneladas; en 1960, se redujo a 1.365.380. En 1961, repuntó a 1.622.140 toneladas.

En resumen, la minería es una actividad esencial de la economía chilena, pero es controlada en su casi totalidad por los grandes consorcios internacionales provocando, en su organización y resultados, situaciones contrarias a los intereses patrios. La economía chilena depende en alto grado de su comercio exterior y, de acuerdo con un análisis científico de él, resulta un cuadro de relaciones propio de una economía semicolonial.

Aunque posee su independencia política los vínculos económicos con las naciones industriales son de tipo colonial. El cobre es una industria trascendental para la economía general de Chile, pero el Estado chileno no tiene ninguna participación efectiva en ella; se desenvuelve como un elemento independiente y ajeno a la realidad de la nación.

VI

La superficie territorial de Chile es de poco más de 74 millones de hectáreas. El ecúmene agrario es de 21.637.060 hectáreas. De esta superficie agrícola sólo se cultivan 5.543.380 hectáreas, el 25,6%. Un 2% son plantaciones forestales (422.535 hectáreas); un 16,8% son bosques naturales, (3.632.114 hectáreas); un 34,6% son pastos naturales en tierras cultivables que no se cultivan, (7.421.312 hectáreas); y 21,3% son matorrales, renovales y montes, (4.617.717 hectáreas).

Chile es uno de los países que dispone de mayor cuota de hectáreas cultivables por habitante (1,7) y, sin embargo, no produce lo necesario para abastecerse. Anualmente gasta más de 100 millones de dólares en alimentos, los cuales se podrían producir perfectamente en su territorio. Con mucha exactitud expresa el economista Jorge Ahumada, en su excelente obra "En vez de la miseria", "la agricultura, no obstante ser la más antigua de nuestras actividades productoras se encuentra en un grado de atraso lamentable".

El atraso de la agricultura chilena tiene su origen en la desigual repartición de la superficie agrícola con un predominio aplastante del latifundio y del minifundio, (como consecuencia de la concentración de la propiedad) y en la ineficiente explotación del suelo por la utilización de métodos anticuados. En los Estados Unidos la hectárea de suelo se cultiva con 13 horas de trabajo-hombre; en Chile, con 160 horas de trabajo-hombre.

Tanto el latifundio como el minifundio constituyen unidades antieconómicas, cuya escasa producción redunde en perjuicio de toda la colectividad. Pero la mayor traba para el progreso lo es el latifundio porque es una vasta propiedad agrícola cultivada en parte, con sistemas primitivos y reducido aprovechamiento del suelo, con mucha mano de obra y poco capital; bajísimos ingresos del trabajador de la tierra y ausentismo patronal. De aquí se desprende la escasez y

alto precio de los productos agrícolas; las importaciones crecientes de productos agropecuarios; la pobreza del campesinado en razón de sus jornales ínfimos; la subalimentación de las clases populares, que ocupan la casi totalidad de sus ingresos en la compra de alimentos; y la restricción del mercado consumidor, básico para la expansión industrial, con lo cual ésta se reduce y encafece.

El periodista Rubén Corvalán V., en un ensayo aparecido en la revista OCCIDENTE, de marzo-abril de 1961, analiza las 151.082 explotaciones agrícolas contabilizadas por el Censo Agrícola y Ganadero de 1955. Suponiendo que minifundio es toda explotación inferior a 10 hectáreas y latifundio la superior a 1.000 hectáreas, entrega este panorama de la realidad chilena: Mientras por un lado existen 75.623 explotaciones agrícolas minifundidas, con 192.410 hectáreas (el 0,88% del ecúmene agrario), por el otro lado existen 3.250 explotaciones latifundidas, con 14.882.978 hectáreas (el 68,8% del ecúmene agrario). Si de este último grupo se desglosan los poseedores de predios superiores a 5.000 hectáreas, que son 696, éstos poseen 10.359.240 hectáreas, el 48% del ecúmene agrario.

La concentración de la propiedad rural en pocas manos alcanza su mayor intensidad en la zona del valle central, la región agraria por excelencia de Chile. Entre Aconcagua y Chiloé, se encuentran radicados 2.360 latifundios, de los 3.250 existentes en el país. En la zona central se encuentra el 70% de los latifundios.

El 30% de la población de Chile se compone de labradores (2.400.000). La población activa sobrepasa las 800.000 personas. De ellas 75.623 son propietarios minifundidos y 3.250 son propietarios latifundidos; y 72.209 son medianos propietarios (con explotaciones de 10 a 1.000 hectáreas). Los restantes, 648.918 personas, forman el ejército de los campesinos sin tierras: peones, inquilinos y medieros.

La ley 14.688, de 1961, estableció los salarios campesinos. Por ejemplo, en las provincias trigueras de Bío-Bío, Cautín y Valdivia, fijó los siguientes salarios diarios: \$ 780.— 75% en regalías. \$ 585.— 25% en dinero efectivo. \$ 195.— Total mensual en dinero efectivo: \$ 5.850,00. O sea, cinco y medio dólares. Estos jornales vergonzosos explican la miseria inhumana, la desnutrición, las en-

fermedades y el analfabetismo del campesinado chileno.

Entre mayor es la propiedad rural menor es su rendimiento y menor la superficie realmente cultivada. De 1.300.000 hectáreas regadas no se cultivan 427.000. La agricultura chilena no alimenta a la población del país ni arroja saldos exportables de magnitud como para compensar las importaciones de alimentos. Por eso existe un grave problema alimenticio y se aprecia una progresiva desnutrición en el pueblo, afectando a la niñez. Según las estadísticas de diversos organismos hay déficit por habitante en el consumo de leche, huevos, leguminosas, papas, verduras, frutas, pescados y mariscos. En 1945-47, el consumo de carne por habitante era de 52,8 kilos anuales; en 1957-59 fue de 33,9 kilos anuales. Sobre el consumo de proteínas, en 1945-47, el consumo medio era de 30,2 gramos diarios; en 1957-59, fue de 26 gramos diarios. Los expertos estiman un déficit de 15 gramos diarios por habitante.

En un informe de la Junta de Auxilio Escolar, en 1957, se dieron los datos siguientes: "El 98% de los niños recibe menos calcio del requerido, lo que predispone a la tuberculosis y al raquitismo; el 54% menos proteínas; el 91% menos vitamina A; el 85% menos vitamina C, y el 43% menos hierro"... "Los niños estudiantes se encuentran en situación incompatible con su desarrollo normal y un buen estado de salud, lo que se revela en el hecho de que un 60% de ellos presenta talla y peso inferiores a los normales; el 70% se encuentra en diversos grados de sub-alimentación, y el 30% restante revela estar en condiciones límites de normalidad nutritiva".

Además, el 86% de los niños tiene su dentadura enferma.

Según estadísticas de la Corfo el comercio exterior agrícola (exportaciones e importaciones) arrojó los siguientes saldos en contra: 79,2 millones de dólares en 1955; 52,1 millones en 1956; 55,4 millones en 1957; 67 millones en 1959 y 83,4 millones, en 1961. La balanza comercial de la agricultura que tuvo saldos favorables hasta 1942, se transformó en saldos desfavorables desde entonces. En 1948, el saldo negativo fue de 6 millones de dólares; y se elevó a 63 millones en promedio en el periodo de 1955-57. Entre 1945 y 1956, Chile importó productos agropecuarios por valor de 900 millones de dólares y se estima que un 65% de ese total corresponde a productos que pudieron darse en el

país, es decir unos 600 millones de dólares.

El crecimiento agrícola alcanza a 1,5% y la población aumenta en 2,5%. El déficit agropecuario per cápita aumenta en 1% al año.

El panorama chileno en este aspecto es sombrío: la población aumenta y decrece la cantidad física de los productos; la estructura agraria actual arruina los suelos en muchas provincias; mantiene en miserables condiciones de vida a los campesinos; arruina a la inmensa mayoría de los pequeños y medianos agricultores; da a la comercialización la mayor parte del precio (el productor no recibe más de un 35% del precio en que se venden sus productos al consumidor final) de los productos agrícolas perecibles no llega al consumo el 50%, o sea, la mitad se pierde por falta de bodegas, frigoríficos, o por no convenir la cosecha a causa del bajo precio o la expoliación del intermediario. (En 1959, el precio que recibía por un kilo de arroz el agricultor era de \$ 87 y el precio al público de \$ 174; en 1961, el agricultor siguió recibiendo \$ 87, y el consumidor pagó a \$ 275 el kilo).

La agricultura tributó en 1947, el 11,9% del total de los impuestos directos percibidos por el Estado, en ese año. Porcentaje pequeño si se toma en cuenta que ocupa un tercio de la mano de obra, más de la mitad del crédito de fomento y capta un sexto del ingreso nacional. De 1950 a 1957 el porcentaje con que la agricultura contribuye al total de impuestos directos ha venido disminuyendo gradualmente. Sin embargo, el Estado canaliza miles de millones de pesos hacia la agricultura tanto en crédito de fomento agrícola, a través de bancos y cajas, como por las inversiones en caminos, almacenes de depósitos, frigoríficos, mataderos, centrales lecheras, riego, mecanización de labores agrícolas, (venta a plazo de miles de tractores, sembradoras, carros de arrastre); en instituciones creadas por el Estado para el desarrollo agrícola; o por la cooperación internacional: Plan Chillán, FAO, etc.

A pesar de todo, el atraso de la agricultura es indiscutible, provocando una crisis profunda en el país, y cuyo origen reside en la estructura arcaica, semifeudal, pre-capitalista del régimen de tenencia de la tierra agrícola. Las opiniones de los técnicos son unánimes al respecto y por ello el gobierno norteamericano ha exigido una reforma agraria si se desea su ayuda económica.

Entre las numerosas consideraciones científicas sobre el problema agrario chileno, me-

recen una referencia especial las **del economista agrícola francés René Dumont**, quien tuvo destacada participación en la XXV Escuela Internacional de la Universidad de Chile, referente a la incorporación del agro latinoamericano al siglo XX. En su ensayo "Subdesarrollo, hambre y subempleo en la agricultura", (publicado en la revista POLITICA, de Caracas), al enfocar la aparcería, sistema muy común en las provincias centrales de Chile, en especial en los cultivos más exigentes de mano de obra, como las "chacras", dice: **"la participación del propietario chileno en las cosechas, corresponde, probablemente, a la que existía en Europa a fines de la Edad Media y hasta el siglo XVI. Pero a pesar de las condiciones por él impuestas, el propietario se cree generoso, ya que tiene numerosas solicitudes de "medieros" y pretende, además, que con asalariados sus beneficios serían mayores. Esta pretensión nace del hecho de como son pagados los salarios a los "inquilinos": dos tercios le son atribuidos en especies y corresponden al alojamiento, al pequeño terreno para huerta y jardín y a veces al derecho de pasto para dos o tres animales; en metálico, recibe 250 pesos diarios, menos de un cuarto de dólar, lo que se acerca a los salarios indios más bajos.** Cuando el tractor del latifundio no es utilizado en forma total y diaria y el inquilino debe trabajar su campo con azadón, hay, por un lado, un material inútil y, por el otro, una baja productividad de la mano de obra. **La modernización de la agricultura, sería realizada más fácilmente si se remunerase en forma más justa al trabajador.** Si éste recibiese salarios más altos el propietario estaría obligado a cultivar mejor sus campos para seguir recibiendo beneficios que le permitiesen vivir cómodamente. Por ahora, dadas las condiciones actuales, **muchos "fundos" chilenos no producen más que un tercio o una cuarta parte de su capacidad de producción.** Con el empleo de técnicas tan malas como he visto a menudo, los agricultores europeos se arruinarían. **Creo que los bajos salarios, son la causa esencial en el estancamiento de la agricultura chilena,** la que desde hace treinta años progresa muy lentamente y, en todo caso, a un ritmo inferior al del aumento de la población. Con un terreno fértil y un generoso clima, **el nivel medio de vida del "inquilino",** excepto en los alrededores de Santiago y un pe-

queño rincón del sur, **me parece, actualmente, muy inferior al del campesino negro del África tropical.** Y durante todo este periodo, Chile importa el 30 por ciento de los alimentos que necesita, y exporta un 10 por ciento, lo que compromete sus posibilidades de importación de elementos para su desarrollo industrial".

Respecto a un posible cambio en la situación de la agricultura chilena, manifiesta René Dumont: "Pero para realizar una reforma agraria se necesita cierto número de condiciones políticas que no existen actualmente en Chile. De todas formas, en el estado actual del orden social y político se puede orientar el desarrollo agrícola hacia un aumento más rápido de la producción, para que Chile salga de su estagnamiento agrícola y libere al "inquilino" y al trabajador de los suburbios, del hambre, o al menos de la penuria en calidad o cantidad, en sus regímenes alimenticios... El agricultor chileno paga una contribución irrisoria, lo que permite a ciertos comerciantes, industriales, miembros de profesiones liberales, comprar grandes extensiones de terreno para preservar de la inflación a sus capitales, sin ningún interés en el mejoramiento de los cultivos. La contribución sobre la tierra debiera ser proporcional a la potencialidad de rendimiento del suelo y no a la producción que tenga; o sea, al que saca grandes cosechas de terrenos pobres, corresponde una baja contribución y, por el contrario, quien dedica a praderas, tierras ricas y regadas, debe de pagar tales impuestos, que se vea obligado a cultivar verdaderamente o a vender. La contribución debiera ser particularmente elevada para las praderas y viñas de riego, para los prados naturales en zonas planas y regadas que no se labran nunca, para los propietarios que no residen en sus dominios y para los predios demasiado grandes. Con este tipo de contribuciones el precio de la tierra tendería a bajar y nadie compraría un "fundo" para no trabajarlo, pudiendo el agricultor dedicar una parte de sus reservas en inversiones realmente productivas, como obras para mejor aprovechamiento del agua, nivelación de terrenos, lucha contra la erosión y, sobre todo, labranza y fertilización".

(Por la extensión del presente trabajo publicaremos s. parte final en nuestro próximo número).